



PRAP-CP - 20118010319551

Bogotá D.C., Miércoles, 08 de Junio de 2011

Doctor

ARMANDO ROVIRA MATEUS

Jefe de Grupo de Presupuesto

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

AERONAUTICA CIVIL

Avenida El Dorado No. 103 – 15

Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta a su consulta No. 20116630152602

Respetado Doctor

En atención a la consulta de la referencia de acuerdo con la cual nos formula algunas inquietudes respecto del procedimiento presupuestal para la adición de contratos, que se realiza a través de la determinación de su límite expresando su valor en SMMLV, procedemos a dar respuesta en los siguientes términos.

Como punto inicial, cabe aclarar que el Departamento Nacional de Planeación según las funciones atribuidas por el Decreto 3517 de 2009 y los documentos Conpes 3248 y 3249 de 2003, tiene limitada su competencia en materia de Contratación Pública a la orientación y el seguimiento del proceso de implementación de la estrategia transversal de reforma a la contratación pública; la cual tiene como eje la formulación de una Política Pública en la materia, que se base en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos.

En este sentido, esta dependencia NO es competente para atender consultas específicas y concretas relacionadas con el caso particular propuesto por usted, ni asuntos presupuestales, sobre los cuales no se pronunciará.

No obstante lo anterior, se hará una breve exposición de la normativa que rige la materia en asuntos contractuales, desde una perspectiva en abstracto, para que adopte la posición que considere más conducente conforme la situación particular y concreta. Sobre los asuntos presupuestales, remitiremos con esta respuesta nuevamente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se pronuncie de fondo sobre el asunto consultado.



1. Planeación en la Contratación

Los estudios y documentos previos, necesarios en todos los procesos contractuales, se encuentran previstos en el artículo 3 del Decreto 2474 de 2008. Éste establece que *"estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone"* (negritas fuera de texto).

Deberán contener además, la descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación; la descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar, el **presupuesto estimado para la contratación** y los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección, entre otros.

Así, una vez determinadas en los estudios previos las características y naturaleza del bien o servicio a contratar, y **verificada su cuantía según su presupuesto**, la modalidad de selección para la escogencia del contratista, debe atender las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, previstas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, el cual prevé como modalidades de selección la Licitación Pública, la Selección Abreviada, el Concurso de Méritos y la Contratación Directa. **De esta manera, es la entidad la que en función de la necesidad que pretende satisfacer, debe establecer las condiciones técnicas del servicio o bien que desea contratar para atender esa necesidad y el presupuesto que requerirá para atender dicha finalidad.**

De acuerdo con el segundo inciso del primer numeral del artículo 30 en concordancia con el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, la apertura de los procesos contractuales *"debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de apropiaciones según el caso"*.

En consecuencia, desde antes de la apertura al proceso contractual deben preverse todas las situaciones que puedan influir en el costo del contrato para evitar adiciones posteriores al contrato por falta de previsión en dichos estudios y la responsabilidad que ello pueda generar.

2. Adición de los contratos estatales

Dicho lo anterior, la figura de la adición debe responder, en principio, a causas exógenas a la Administración que la obligan a incrementar el valor del contrato **por razones del servicio o de la imprevisibilidad** y no, a omisiones en los estudios respectivos a cargo de la entidad, del consultor o del interventor.



En este sentido es indispensable distinguir entre **adición del contrato**, o contrato adicional y la **mayor ejecución** del servicio contratado.

Así, la **adición de contrato**, es aquel aumento del valor contractual con ocasión de la *modificación del objeto contratado*¹, como la adición de ítems no previstos en el contrato, cambios en el alcance del objeto, etc; las cuales requieren la realización de un **otro sí o contrato adicional** en el cual queden consignadas las modificaciones efectuadas al contrato, tanto en ítems, diseños, valores, plazos, etc.²

Por su parte, la **mayor ejecución del servicio contratado**, hace referencia a la ejecución de mayores cantidades o *ítems contratados*, que no implican la modificación del contrato, habida cuenta que las cantidades estipuladas originariamente en este tipo de contratos son solamente una *estimación* o aproximación, cuyo valor definitivo solo se obtendrá al finalizar el contrato de la suma de las multiplicaciones de las cantidades contratadas por los precios unitarios ofrecidos por el contratista.

Lo anterior aplica principalmente en los contratos estipulados bajo la modalidad de **precios unitarios**, conforme a los cuales se ejecutarán las mayores cantidades, pues en las demás modalidades de pago que no sean determinables no sería procedente tal operación.

En este sentido, es pertinente aclarar que el contrato celebrado bajo esta modalidad hace parte de los llamados **sistemas de precios indeterminados pero determinables** con base en los precios ofrecidos (precios unitarios) o comprobados (reembolso de gastos y administración delegada), según el caso, por el contratista.

Por lo tanto, la cláusula de valor en el mismo “apenas sirve de indicativo de un monto estimado hecho por las partes” y solo “sirve para elaborar el presupuesto o para efectos fiscales”³.

En efecto, el Consejo de Estado ha dicho a este respecto que:

“Es preciso, entonces, entender que solamente habrá verdadera “adición” a un contrato cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, es decir, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple

¹ “No desconoce la sala que la adición del contrato por modificación del objeto puede conllevar al incremento del valor del precio inicialmente pactado, pero no es a esta modificación del valor a que se refiere el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993, pues tal interpretación llevaría al enfrentamiento de las disposiciones analizadas, lo que en aplicación del efecto útil de las normas conduce a colegir que la reforma de precios aludida en ese parágrafo es aquella surgida de mayores cantidades de obra ya ejecutadas o, cuando de imprevistos en la ejecución del contrato se trata”. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia de 20 de mayo de 2004. Exp. 3314. Consejera Ponente: María Noemí Hernández Pinzon.

² De esta forma, la Contraloría General de la República, mediante concepto No. 80112- 1504 del 4 de junio de 2003, expresó lo siguiente en relación con la adición al contrato de obra así: “En cuanto al contrato de obra, la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que éstos se adicionan cuando existe una ampliación del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple ajuste del valor estimado inicialmente del contrato, en razón a que las cantidades de obra estimadas en el momento de celebrar el contrato no fueron las adecuadas.” (Subrayas fuera del texto).

³ Departamento Nacional de Planeación. *Manual de Buenas prácticas para la gestión contractual pública*. Bogotá. 2004. Pág. 23 Disponible en: http://www.contratos.gov.co/Archivos/MANUAL_BUENAS_PRACTICAS.pdf



Libertad y Orden

Departamento Nacional de Planeación
República de Colombia

Prosperidad
para todos

*ajuste del valor estimado inicialmente del contrato, en razón a que el cálculo de cantidades de obra estimada en el momento de celebrar el contrato no fue adecuada; en otros términos, los mayores valores en el contrato no se presentan debido a mayores cantidades de obra por cambios introducidos al alcance físico de las metas determinadas en el objeto del contrato, sino que esas mayores cantidades de obra surgen de una deficiente estimación inicial de las cantidades de obra requeridas para la ejecución de todo el objeto descrito en el contrato*⁴

En consecuencia, "es fácil concluir que es un error celebrar contratos adicionales a los contratos principales celebrados por alguno de los sistemas de precios determinables, para poder ejecutar obras cuyo costo de ejecución sobrepase el estimado inicialmente. En efecto el error consiste en pensar que ese precio estimado inicialmente es el verdadero contrato, pues, como se explicó, solo es un estimativo pero **el verdadero valor se determinará una vez concluya**. Por lo mismo, **no se trata de que se esté adicionando el contrato**, no, **solo se está procediendo conforme lo previsto**, esto es, aplicando el procedimiento de precios unitarios a las cantidades ejecutadas y, por consiguiente, si son más cantidades a las previstas, pues el valor del contrato es mayor, pero así fue como se convino"⁵.

Por otra parte, debe resaltarse que esta figura contractual no debe ser utilizada para *justificar omisiones* en los estudios previos ni puede abusarse de su utilización para adicionar cantidades para la ejecución de *actividades no imprevisibles ni presupuestadas* inicialmente, pues ello puede acarrear consecuencias disciplinarias, penales y fiscales para el responsable.

Así las cosas, en tratándose de mayores valores no es necesario suscribir un contrato adicional (otrosí) para la formalización de tales acuerdos, habida cuenta que éstas se deben a la ejecución real de los ítems previamente estipulados los cuales serán reconocidos a los precios unitarios pactados en el contrato⁶ para lo cual debe contarse con la partida presupuestal correspondiente.

Entre tanto, para las obras adicionales que modifiquen el alcance o el objeto del contrato, se requerirá de la celebración de un nuevo acuerdo con el contratista, el cual deberá ser recogido en un otrosí, con la partida presupuestal que lo respalde.

3. Límite legal a la adición de contratos estatales

En relación con la adición de los contratos estatales, es claro el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, referido al contenido del Contrato Estatal al establecer que:

⁴ Concepto Consejo de Estado, 18 de julio de 2002, Consejera ponente: Susana Montes De Echeverri

⁵ *Manual de Buenas prácticas para la gestión contractual pública*. Pág. 23

⁶ A este respecto, el Consejo de Estado ha manifestado que las actas de liquidación que no reconozcan los mayores valores de obra efectivamente ejecutados por los contratistas y requeridos por la entidad, están viciadas de nulidad. Ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 28 de Agosto de 1996. Exp. 9347. Consejero Ponente: Carlos Betancur Jaramillo.



“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. (Negritas fuera de texto)

En conclusión, cuando se van a realizar **adiciones** que modifican el alcance del objeto contratado, los cuales se deben realizar mediante otrosí, aquellos no deben superar el 50% del valor inicial del contrato, expresado éste en SMMLV.

Entre tanto, cuando se van a ejecutar **mayores cantidades**, no puede entenderse que se está adicionando el contrato, sino que se realiza una operación matemática que permite determinar el valor real del contrato, pues el valor *inicial* no es sino una aproximación al valor real que será el resultante en la liquidación final, motivo por el cual, no puede predicarse de dicha ejecución un límite legal, pues imponerlo afectaría la *buena ejecución de los servicios y el logro del fin perseguido con la contratación*.

Finalmente, los límites para la adición de contratos proceden cuando efectivamente se realizan adiciones al objeto contractual y no cuando se hace un simple cálculo matemático que pretende determinar el valor real del contrato. Cabe aclarar que en todo caso, deberá calcularse para tal efecto que el valor de la adición no supere el 50% del valor del contrato calculado en SMMLV lo que constituye una forma de actualización del precio convenido establecido por el legislador, cuando la ejecución del contrato supera la anualidad de la vigencia fiscal.

Respecto de los contratos de concesión, hay que precisar que la Ley 1150 introdujo modificaciones importantes sobre la adición o prórroga (ya que en este caso la adición en tiempo implica la adición en valor) así:

4. Limitantes a la adición de contratos de concesión

En relación con la prórroga y adición de los contratos de **concesión de obra pública**, el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007 señaló lo siguiente:

ARTÍCULO 28. DE LA PRÓRROGA O ADICIÓN DE CONCESIONES DE OBRA PÚBLICA. En los contratos de concesión de obra pública, podrá haber prórroga o adición hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo estimado, independientemente del monto de la inversión, siempre que se trate de obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado o de la recuperación de la inversión debidamente soportada en estudios técnicos y económicos. Respecto de concesiones viales deberá referirse al mismo corredor vial.

Toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional requerirá concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes–.



No habrá prórrogas automáticas en los contratos de concesiones. (negritas y subrayas fuera de texto)

Nótese como el Legislador señaló que la prórroga de las concesiones de obra podría realizarse hasta por el 60% del plazo estimado **sin tener en consideración el modelo financiero** adoptado en la concesión respectiva.

Adicionalmente, hay que precisar lo que entendió el legislador por plazo estimado. Al respecto, en los considerandos del Acta de Conciliación de la Ley 1150 de 2007, luego de revisar los antecedentes legislativos, se explica la intención del legislador en que la prórroga del plazo de las concesiones fuera contabilizada con base en el término "inicialmente" pactado. Así se extrae del Acta de Conciliación⁷ el cual dice al tenor de su texto:

"En cuanto a la prórroga o adición de concesiones de obra pública, se estipula que las prórrogas o adiciones no podrán implicar extensión del plazo estimado inicialmente en más de un sesenta por ciento (60%) independientemente del monto de la inversión" (negritas y subrayas fuera de texto)

De esta manera, aun cuando en la norma legal no quedó la palabra "inicialmente" sí es claro que las razones que motivaron al legislador de la Ley 1150 de 2007 era **dar la posibilidad de adicionar (prorrogar) los contratos de concesión con una limitante establecida en hasta el 60% del plazo Inicialmente estimado**. Luego, el plazo que deberá tenerse en cuenta para estos efectos, es ese y no otro distinto ni superior a aquél.

Por otra parte, para que sea procedente la adición o prórroga de los contratos de concesión de obra, es necesario dar cabal cumplimiento a los requisitos enlistados en la norma para que proceda la misma. En efecto, la norma establece como **requisitos** para la adición o prórroga:

1. Que sea **hasta por el sesenta por ciento (60%) del plazo inicialmente estimado**
2. Que se trate de **obras adicionales directamente relacionadas con el objeto concesionado o de la recuperación de la inversión** debidamente soportada en estudios técnicos y económicos.
3. Respecto de **concesiones viales, deberá referirse al mismo corredor vial**.
4. **Concepto previo favorable** del Consejo Nacional de Política Económica y Social – Conpes–.

Ahora bien, respecto de lo que debe entenderse por el **mismo corredor vial**, resulta ilustrativo lo manifestado por el H. Consejo de Estado el cual señaló el alcance la expresión "sistema vial" mencionada en el artículo 33 de la ley 105 de 1993 "por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades

⁷ Gaceta del Congreso No. 274 13/06/2007. Informe de Conciliación al Proyecto de Ley 020 de 2005 Senado, 057 de 2006 Cámara.



Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones", donde indicó el alto Tribunal⁸:

"La expresión "dentro del mismo sistema vial" mencionada en el artículo 33 de la ley 105 de 1993 significa que las obras adicionales deben tener relación directa con éste, ya sea que constituyan una vía alterna a la proyectada, una prolongación o derivación de la misma en cualquiera de sus extremos, y por tanto no necesariamente deben estar ubicadas dentro de los límites físicos del proyecto vial de la concesión inicial." (negritas fuera de texto)

En relación con la prórroga de los contratos de concesión para la prestación de servicios de telecomunicaciones y de televisión, el artículo 27 de la Ley 1150 dispone lo siguiente:

"ARTÍCULO 27. DE LA PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y DE TELEVISIÓN. El término de duración de las concesiones actuales y futuras para la prestación de los servicios y actividades de telecomunicaciones, incluidas las de televisión, será de diez (10) años prorrogables por lapsos iguales. En ningún caso habrá prórrogas automáticas ni gratuitas."

5. Contratos interadministrativos

Mediante Concepto con radicado No. 1476 del 22 de noviembre de 2002, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

"Adicionalmente debe decirse que, en tratándose de convenios o contratos interadministrativos, la limitación a que se refiere el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 no tiene aplicabilidad, pues son acuerdos que se pueden celebrar en forma directa, cualquiera sea su monto, sin que haya obstáculo alguno para ello por permitirlo la ley; basta que se busque la satisfacción de los servicios o, el cumplimiento de las funciones a cargo de las entidades comprometidas. Por lo mismo, también es posible ampliar su valor sin límite distinto de los propios del régimen presupuestal, pues si es posible celebrar varios acuerdos o convenios, no existe ninguna justificación para que en lugar de suscribir diferentes documentos se amplíe un contrato celebrado." (Negritas y Subrayas fuera de texto).

No obstante lo anterior, la Contraloría General de la República mediante Concepto 80112 – EE40091 Bogotá, D.C., de Julio 17 de 2009, indicó el alcance de dicho concepto del Consejo de Estado, partiendo de la diferencia entre contrato y convenio interadministrativo donde concluyó que el primero persigue un interés remuneratorio particular, mientras que el segundo la finalidad que se persigue es aunar esfuerzos para la realización de fines estatales sin ánimo de interés particular,

⁸ Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Concepto del 12 de diciembre de 1997. tomado de <http://www.portafolio.com.co/opinion/blogs/juridica/prorroga-de-contratos-de-concesion-de-obra-publica>



vale decir, propende por "la satisfacción de los servicios o, el cumplimiento de las funciones a cargo de las entidades comprometidas" en los términos señalados en la Ley 489 de 1998. En efecto la Contraloría se pronunció en los siguientes términos:

"Opinamos que el Consejo de Estado emitió su Concepto, en el sentido de que si el convenio ó contrato interadministrativo de que se trate, persigue un interés remuneratorio particular no se puede adicionar en cuantía superior al 50% de su valor inicial, por el contrario si la finalidad que se persigue es aunar esfuerzos para la realización de fines estatales sin ánimo de interés particular, tiene su razón de ser el que no se limite la adición en valor. Cabe anotar que el límite siempre serán las normas de carácter presupuestal.

Más allá de la denominación "contrato interadministrativo" ó "convenio interadministrativo", se debe verificar dentro del contenido de lo pactado si se dan los elementos que caracterizan al contrato ó al convenio interadministrativo para evitar disfrazar un contrato a través de la denominación de un convenio."
(Negritas y Subrayas fuera de texto)

Así las cosas, "en estricto rigor jurídico, entonces los contratos interadministrativos se distinguirían de los convenios interadministrativos en que en los primeros por regla general hay entre las partes intereses opuestos y buscan perseguir una retribución ó pago, por el contrario en los segundos las partes tienen intereses comunes para lograr el cumplimiento de una finalidad estatal impuesta por la Constitución ó la ley sin que por ello se reciba ningún pago ó ventaja económica."⁹

En vista de lo anterior, es preciso señalar que en tratándose de contrato o convenio interadministrativo, siempre que impliquen una contraprestación entendida como retribución ó pago sin propender únicamente por los intereses comunes que las convocan para lograr el cumplimiento de una finalidad estatal impuesta por la Constitución ó la ley, será aplicable el límite del 50% para su adición de que trata el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 referido en este concepto.

6. Tratamiento de la adición a los contratos de interventoría

El artículo 73 del Decreto 2474 de 2008 establecía en su último inciso la posibilidad de dar continuidad al contrato de interventoría en proporción al contrato principal o vigilado con el objeto de garantizar la vigilancia y control de dicho contrato. no obstante lo anterior, dicho inciso fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Rad. 2008-00101-00(36.054), sentencia del 14 de abril de 2010 bajo la premisa que la restricción del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 no traía excepción alguna en este sentido para el contrato de interventoría.

En vista de lo anterior y con el objeto de garantizar la continuidad de la vigilancia y control de los contratos objeto de interventoría, el Congreso de la República recientemente ha aprobado el texto conciliado del Proyecto de Ley número 174 de 2010 Cámara, 142 de 2010 Senado "Por la cual se

⁹ Contraloría General de la República mediante Concepto 80112 – EE40091 Bogotá, D.C., de Julio 17 de 2009



dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" en el cual prevé la posibilidad de ampliar el contrato de interventoría por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia, caso en el cual, se da la posibilidad que, cuando la entidad lo encuentre necesario, adicione el valor del contrato sin que resulte aplicable la restricción contenida en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Así señala el proyecto de Ley que esta por ser sancionado por el Presidente de la República:

"Artículo 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Parágrafo. Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato principal; el Gobierno Nacional regulará la materia. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7° de la Ley 1150, en cuanto a la posibilidad que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato."

7. Aspectos presupuestales a tener en cuenta en la adición de los contratos

Para estos efectos, nos permitimos transcribir las conclusiones del concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ref. 10320¹⁰ en el cual analizó las incidencias presupuestales de las adiciones de contratos respecto de las reservas presupuestales y la vigencia fiscal, así:

"Las reservas presupuestales se constituyen con el fin de honrar aquellos compromisos no cancelados en la respectiva anualidad, monto que no podría ser modificado, toda vez que con el registro del compromiso se perfecciona el acto administrativo, y los recursos que lo financian no pueden ser desviados a ningún otro fin.

La adición a un contrato es diferente a uno nuevo, lo cual no obsta para obtener previamente el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza el valor de las obras adicionales, y asegura que éstas cuenten con un respaldo económico para su ejecución.

En caso que al cierre de la vigencia fiscal los compromisos no se hayan cumplido, se encuentren legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación, se podrá constituir la correspondiente reserva presupuestal, la cual fenece a 31 de diciembre de la vigencia fiscal en la que se constituye.

¹⁰<http://www.irc.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda/haciendapublica/normativa/presupuesto/concejuridicos/RESERVASYADICIONDECONTRATOS.pdf>



Constituida la reserva presupuestal, y encontrándose en ejecución, podría la entidad, al amparo de la ley 80 de 1993, adicionar el contrato con recursos de la Vigencia Fiscal en la que se lleve a cabo dicha adición, sin que sobrepase esa anualidad; de esta forma se respeta el Principio de Anualidad. En caso de exceder ese límite temporal, se debió prever inicialmente, la autorización de Vigencias Futuras." (subrayas y negritas fuera de texto)

8. Conclusión

Desde antes de la apertura al proceso contractual deben preverse todas las situaciones que puedan influir en el costo del contrato para evitar adiciones posteriores al contrato por falta de previsión en dichos estudios y la responsabilidad que ello pueda generar.

Dicho lo anterior, es claro como la **mayor ejecución del servicio contratado**, en los contratos estipulados bajo la modalidad de **precios unitarios** no implican la modificación del contrato, habida cuenta que las cantidades estipuladas originariamente en este tipo de contratos son solamente una *estimación* o aproximación, cuyo valor definitivo solo se obtendrá al finalizar el contrato de la suma de las multiplicaciones de las cantidades contratadas por los precios unitarios ofrecidos por el contratista, razón por la cual, en estos contratos no es necesario realizar ninguna modificación de los respectivos contratos, sin perjuicio del deber de planeación adecuada del objeto a contratar y que para el efecto se cuente con las correspondientes partidas presupuestales y formalidades respectivas a que haya lugar.

Cuando resulta necesaria y justificadamente adicionar las actividades del contrato, no solo la simple mayor ejecución del contrato, la entidad debe contar con la partida presupuestal correspondiente que la respalde y cumplirá los procedimientos contractuales previstos para esos efectos.

No se puede adicionar un contrato que ha sido motivo de reserva presupuestal o mucho menos cuando ya se ha contabilizado como cuenta por pagar, porque además de desconocer el principio de planeación contractual, viola el de anualidad establecido en materia presupuestal, lo que implicaría "inducir una vigencia futura" con las responsabilidades que de ello se deriven conforme al Código Único Disciplinario.

La limitante a la adición de los contratos es el 50% del valor inicial, expresado en SMMLV a efectos de mantener actualizado el valor del contrato para lo cual deberá existir la respectiva partida presupuestal, sin perjuicio de las reglas especiales aplicables a determinado tipo de contratos.

Copia de este concepto será remitido a la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que responda lo relacionado con el manejo presupuestal de las adiciones expresadas en SMMLV objeto de consulta.

Conforme a lo establecido en el artículo 230 de la Constitución Política y el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, las respuestas dadas por esta entidad a las consultas que se elevan, no



Libertad y Orden

comprometen su responsabilidad ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución; por lo tanto, es deber del interesado evaluar las opiniones jurídicas consignadas en los conceptos, sopesarlas a la luz de la normatividad y jurisprudencia, aplicables en la materia, y asumir su propia posición, conforme al grado de análisis y convencimiento adquirido.

Cualquier aclaración con gusto la atenderemos.

Atentamente,

PAOLA GÓMEZ CAMPOS

Directora

Programa de Renovación de la Administración Pública

Copia: Dr. José Fernando Jiménez – Director de Presupuesto – Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Elaboró: Jorge Hernán Beltrán Pardo
Revisó: Diana Patricia Bernal Pinzón

DNP
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN